La explosión del magisterio michoacano

Luis Hernández Navarro La Jornada 05 de febrero de 2019

El 7 de enero comenzó en Michoacán una potente movilización magisterial, que hoy parece haber cambiado de terreno. Usualmente, los paros indefinidos en esa entidad arrancan con la participación de 30 o 40 por ciento de los maestros y luego se extienden al resto de las escuelas y centros de trabajo. Sus formas de lucha se van escalonando de menor a mayor beligerancia. Sin embargo, en esta ocasión la dinámica fue distinta. Casi desde el primer momento la suspensión de actividades fue masiva y sus acciones explosivas. Los docentes bloquearon vías del tren y ocuparon las oficinas recaudadoras de rentas los municipios

La protesta fue un movimiento de base genuino en el que participan maestros de todas las corrientes sindicales: desde la CNTE al SNTE, pasando por Maestros por México y el CEND. Sin embargo, quien condujo la lucha fue, en lo esencial, la CNTE.

El conflicto fue provocado por el continuo y sostenido incumplimiento de múltiples compromisos laborales por parte del gobernador Silvano Aureoles, acumulados a lo largo de varios años, que suman casi 7 mil millones de pesos. Se agravó por su pretensión de pasar la bronca al gobierno federal, saliéndose unilateralmente del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica vigente desde 1992, y trasladarle a la SEP la nómina del magisterio estatal. La decisión fue tomada pocos días antes de que el nuevo presidente tomara posesión.

El problema creció aún más, cuando, irresponsablemente, el gobernador se fue de gira a Europa durante 12 días, mandó a negociar a empleados sin capacidad y peleó con los funcionarios federales encargados de atender el problema. La secretaria de Gobernación –dijo Silvano a los diputados del PRD– no ayuda. Llama para regañar y para dar instrucciones. Se mostró muy ofendida y me regañó... De allí se derivaron palabras que ya no han permitido que se derivara el diálogo. No hay con quién platicar el tema desde la perspectiva política.

La gota que derramó el vaso de la inconformidad fue el pago retrasado de los salarios de 32 mil trabajadores de la educación estatales. No obstante que la Federación transfirió recursos,

Aureoles liquidó la primera quincena de diciembre hasta el 27 de ese mes, y la primera de enero hasta el 26.

Los maestros nunca demandaron dinero ni para la CNTE ni para el sindicato. Buscaron resolver graves problemas que afectan a profesores estatales y a normalistas egresados desde 2014, no a docentes federales. Aureoles les debe por concepto de bonos mil 64 millones de pesos. A pesar de que ya les descontó 388 millones para el Fondo Estatal de Pensiones Civiles y cuatro meses de cuotas para el Issste, no ha aportado estos recursos a estas instituciones.

No obstante que descuenta a los maestros vía nómina el pago de seguros de vida y de créditos para adquirir bienes y servicios, el gobierno del estado no ha depositado a las empresas contratadas el dinero que ya descontó a los docentes. Mientras el gobierno federal absorbe el pago del ISR de los maestros federales, el gobierno estatal se lo descuenta a los maestros locales. Incumple el principio de a trabajo igual, salario igual.

A unos 4 mil 800 normalistas egresados de planteles públicos de 2014 a la fecha que laboran sin contrato o con contratos precarios de dos y tres meses no se les ha pagado o se ha hecho irregularmente. El gobierno estatal jinetea las jubilaciones. Los internados y centros de desarrollo infantil que requieren alimentar a niños de dos a tres años y jóvenes inscritos no tienen recursos para adquirir la comida.

Cuando la nómina magisterial pasó del Fondo de Aportaciones de la Educación Básica y Normal al Fondo Nacional de la Nómina Educativa (2013 y 14), se dejó fuera del FONE a 18 mil 500 maestros. Para complicar más las cosas, el presupuesto para educación básica de 2019 aprobado por el Congreso local es de solamente 130 millones de pesos quincenales, cuando se requieren 240 millones. Una bomba de tiempo.

El conflicto con los trabajadores de la educación en Michoacán fue producto de la apuesta de Aureoles de confrontar al gobierno de López Obrador utilizando a los maestros. El mandatario estatal apoyó en los pasados comicios la candidatura presidencial de José Antonio Meade y se enredó con múltiples problemas financieros y administrativos. Escaló su pleito con el Presidente como maniobra para tender una cortina de humo sobre sus problemas.

En la negociación entre la SEP, el gobierno de Michoacán y la CNTE se hicieron propuestas para desatorar el conflicto. Sin embargo, no se resolvió algo medular: la restructuración del presupuesto de egresos estatal para garantizar el pago de la nómina, parte del origen del problema.

Más allá del ámbito local, el conflicto michoacano es parte de una bronca mayor que aqueja al conjunto del sistema educativo nacional: el fracaso de la descentralización educativa (1992), de

la Alianza por la Calidad de la Educación (2007) y de la reforma educativa (2012). En casi todo el país, el marco educativo está a punto de reventar. Michoacán no fue excepción, sino anticipo de lo que puede suceder.

Twitter: @lhan55

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2019/02/05/opinion/013a1pol